

EL MATRIMONIO CIVIL

Benedicto Hansko S. J.

El Padre Benedicto Hansko estudió en la Facultad de Filosofía de Gallarate (Italia), en el Instituto Teológico de Banská Bystrica (Eslovaquia). Se doctoró en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana (Roma).

Ejerció la docencia en Ruzomberok (Eslovaquia). Desde 1952 ocupa la Cátedra de Derecho Canónico en el Seminario Metropolitano de Buenos Aires.

Importancia de la cuestión

La experiencia cotidiana nos enseña que muchos católicos argentinos tienen una falsa noción acerca del matrimonio civil. Unos identifican el matrimonio civil obligatorio con una honesta e inofensiva inscripción en el Registro Civil; otros sostienen que el casamiento civil nunca es sacramento ni verdadero matrimonio entre cristianos y la gran mayoría de la población está persuadida que todo matrimonio válido en el fuero civil es válido también ante Dios.

Se presenta, pues, la pregunta: ¿Cuándo dos personas casadas sólo por el civil son esposos ante Dios, y cuándo su unión no es más que concubinato legalizado? (1).

Es necesario conocer el valor de este

matrimonio para el caso en que una persona casada por el civil desee ingresar en la Iglesia Católica, porque no puede admitirse al bautismo ni a la profesión de fe católica a quien quiere vivir en concubinato (cfr. Can. 752 § 1).

Asimismo requiere saber el valor de dicho matrimonio para cuando los hijos de padres casados sólo por el civil, quieren ingresar en un seminario o en una congregación religiosa. Los hijos ilegítimos son irregulares y no pueden recibir lícitamente la ordenación sacerdotal (can. 984 N° 1). Varios institutos religiosos pueden admitir al noviciado sólo los hijos legítimos o legitimados y en ninguna congregación religiosa un ilegítimo puede válidamente desempeñar el cargo de superior mayor. (Can. 504).

(1) En el artículo presente la expresión "concubinato" debe tomarse en sentido moral (y no en sentido jurídico). No negamos que muchos católicos "casados" sólo por el civil, se unen "affectu maritali" (y no, af-

fectu concubinario); no obstante, si los contrayentes conocen que su matrimonio no tiene ningún valor ante Dios, su vida común, desde el punto de vista moral, no es más que torpe y abominable concubinato.

Adquiere también significación el valor del matrimonio civil cuando una persona casada sólo civilmente quiere ingresar en una asociación piadosa o bien ejercer ciertos actos jurídicos eclesiásticos (como, por ej., ser padrino en el bautismo o en la confirmación, desempeñar en las causas eclesiásticas los oficios de juez, de defensor del vínculo, de notario, de abogado o de procurador; votar en las elecciones eclesiásticas, ejercer el derecho de patronato, etc.). Lo mismo vale cuando se trata de conceder sepultura eclesiástica a una persona casada sólo por el civil. La Iglesia castiga a los conubenarios restringiendo sus derechos (cánones 87, 693, 2256 N° 2, 2357 y 1420 § n. 6).

La cuestión reviste importancia extraordinaria cuando se discute la conveniencia de la ley de divorcio civil absoluto. Todos los católicos de recta conciencia sostienen que una autoridad puramente humana no puede disolver ningún matrimonio válido ante Dios, pero nadie —que yo sepa— defiende la indisolubilidad del concubinato. Huelga subrayar que el concubinato no cambia su naturaleza si se lo legaliza con un acto jurídico llamado “matrimonio civil”.

(2) El matrimonio civil sólo se introdujo después de la “reforma” protestante.

(3) Los matrimonios clandestinos (para los bautizados) fueron declarados nulos en el concilio de Trento. El 11 de noviembre de 1563, después de muchas discusiones, se aprobó el decreto, “Tametsi”, que exige para todos los bautizados (aún para los no católicos) como forma esencial de la celebración del matrimonio la declaración del consentimiento ante el párroco (católico) y dos o tres testigos; caracteriza como “clandestina” toda unión no celebrada en esta forma y la declara nula e inválida.

El decreto “Tametsi” tenía que ser publicado en cada parroquia separadamente. Los padres del Concilio eligieron este modo de promulgación, para salvar la validez de muchos matrimonios entre protestantes, los cuales, ya entonces vivían en territorios compactos: Inglaterra, Países Escandinavos, Escocia, muchas regiones de Alemania, Suiza,

La necesidad de la forma jurídica para el matrimonio.

Por derecho natural de la validez del matrimonio basta el consentimiento válido entre dos personas hábiles. (Conc. Trid. sess. XXIV de refe. matr. cap. I); no se requiere ni la presencia de testigos, ni la bendición del sacerdote, ni la inscripción en el registro público.

En virtud de este principio, hasta la segunda mitad del siglo XVI la Iglesia reconocía como válidos todos los matrimonios “clandestinos”, es decir, los matrimonios cuyos contrayentes no expresaban su consentimiento matrimonial ante el párroco y dos testigos, sino simplemente se unían “*affectu maritali*”, sin más formalidades (2).

Ahora la autoridad pública prescribe una forma determinada para el casamiento y declara nulos todos los matrimonios que se celebran sin observarla (3).

Fácilmente comprenderemos la necesidad de la forma jurídica para el casamiento, si consideramos que el matrimonio no es un asunto privado de dos personas enamoradas. La familia es la base de la sociedad humana y la autoridad pública se siente obligada a proteger la uni-

etc. Donde entró en vigor el decreto “Tametsi” ni los protestantes ni los católicos se casaban válidamente si no expresaban su consentimiento matrimonial ante el párroco (católico) de su domicilio.

La dureza del decreto “Tametsi” había experimentado una atenuación en algunas regiones, en virtud de la célebre Declaratio de Benedicto XIV, de 4 de noviembre de 1741. Según ella, los matrimonios que se celebraban en las provincias unidas de Holanda por no católicos entre sí o con católicos, eran válidos aún *non servata forma tridentina*, mientras que los católicos que se casaban entre sí estaban ligados a esta forma. La Declaración Benedictina fué extendida más tarde a otras diócesis; así por ej. a la de Breslau (26 de febrero de 1765), Guesen-Pogen (22 de mayo de 1841), Hulm (5 de mayo de 1774), el ducado de Cleve (15 de junio de 1763) y algo modificada a las diócesis de Colonia, Trier, Münster, Paderborn, Ermeland, Lim-

dad y la indisolubilidad del vínculo matrimonial. La forma jurídica y los registros públicos responden a una necesidad social.

Prescribiendo la forma jurídica del matrimonio, la autoridad pública no vulnera la ley natural; sólo determina las condiciones en las cuales los contrayentes deben expresar su consentimiento para que el matrimonio sea válido. El bien común exige estas solemnidades; así se evitarán fraudes, y una vaga promesa no será considerada como un consentimiento matrimonial verdadero.

La autoridad competente.

Sólo hay dos sociedades públicas: la Iglesia y el Estado.

¿A cuál de ellas le compete el derecho y el deber de determinar la forma jurídica del matrimonio?

Para contestar a esta pregunta es necesario distinguir entre las personas bautizadas y las no bautizadas.

burg y Basilea. (cfr. A. Knecht, *Derecho matrimonial católico*, Madrid 1932, pág. 485).

La ley tridentina ha sido reformada por S. Pío X. Desde el 19 de abril de 1908 todos los bautizados en la Iglesia Católica y todas las personas que entraron en ella por voluntaria profesión de fe, están sujetos a la forma católica del matrimonio en cualquier país del mundo. Por el contrario, las personas bautizadas fuera de la Iglesia Católica y que nunca pertenecieron a la misma están exentas de esa forma (*Decreto Ne temere* de 2 de agosto de 1907, Gasparri, Fontes, n° 4340).

De la norma introducida por el decreto *Ne temere* existían dos excepciones: una para el Imperio Alemán, la otra para el Reino de Hungría. En ambos países los católicos que se casaban con acatólicos bautizados, contraían matrimonio válido, bajo ciertas condiciones, aún sin observar la forma católica (Lit. ap. de Pío X, *Provida*, Gasparri, Fontes, n° 670 y el indulto de la S. Congregación de Sacramentos, del 27 de febrero de 1909 *Analecta Ecclesiastica*, 1909, pg. 335).

El Código de Derecho Canónico (promulgado el año 1917) retocó algunos puntos de la reforma piana y quitó ambas excepciones.

El casamiento de dos personas no bautizadas no es sacramento en el sentido estricto de la palabra y los no-bautizados son miembros de una sola sociedad pública: el Estado. Se comprende, pues, fácilmente que la autoridad civil sea única que pueda dar leyes matrimoniales para los no-bautizados (4).

El asunto cambia cuando se trata de los bautismos.

Por el bautismo el hombre queda constituido persona en la Iglesia de Cristo; adquiere en ella derechos y obligaciones y queda sujeto a su autoridad (can. 87).

Además el casamiento válido entre dos personas bautizadas es sacramento dado que Jesucristo elevó a la dignidad de sacramento el mismo contrato matrimonial entre bautizados. (can. 1012).

Pues bien, por la voluntad de Jesucristo los sacramentos caen bajo la competencia exclusiva de la Iglesia; sólo la autoridad eclesiástica puede determinar cómo se deben recibir y administrar los sacramentos.

El sacramento del matrimonio no puede ser una excepción (5); la autoridad ecle-

(4) En el siglo pasado hubo algunos teólogos católicos que sostenían que sólo la Santa Sede podía determinar los impedimentos matrimoniales y establecer la forma jurídica del matrimonio para los no bautizados y que todas las causas matrimoniales —en lo que atañe a la validez del vínculo matrimonial— eran de competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica. Después del Código (cfr. can. 1038) la opinión no pudo sostenerse y quedó abandonada. (cfr. De Smet, *De Sponsalibus et matrimonio*, ed. 3, n. 433 sq.).

(5) Para cohonestar la ley de matrimonio civil obligatorio, varios juristas quieren disociar el contrato matrimonial del sacramento, a fin de entregar el contrato matrimonial en manos de los gobiernos civiles, reservando el sacramento para la Iglesia. Su modo de proceder debe rechazarse, porque en el matrimonio cristiano no puede separarse el contrato del sacramento (León XIII, enc. *Arcanum*, n° 15). Hasta tal punto es verdadera esta afirmación que los contrayentes bautizados no se casan válidamente si con un

siástica es ciertamente competente para establecer los impedimentos matrimoniales y determinar la forma jurídica del casamiento para todos los bautizados (cfr. Conc. Tridentinum, sess. XXIV, de ref. matrim. can. 4-Denz. 974; Pío IX, Syllabus n. 68-71, 73-Denz. 1768-71, 1773).

Los matrimonios de los acatólicos bautizados.

Consta que los acatólicos bautizados están sujetos a los impedimentos matrimoniales establecidos por el derecho canónico (can. 12. 87, 1038 § 2) pero es cierto también que la Suprema autoridad eclesiástica ahora no exige que los cristianos disidentes se casen ante un sacerdote católico (6). El Código de Derecho Canónico dice explícitamente: "Los acatólicos, tanto los bautizados como los no bautizados, si contraen matrimonio entre sí, en ninguna parte están obligados a

acto positivo de voluntad excluyen la sacramentalidad de su contrato.

Entre los documentos de la Santa Sede que reconocen a la autoridad civil el derecho de establecer los impedimentos matrimoniales y prescribir la forma jurídica del matrimonio para los no bautizados, se puede citar especialmente la instrucción de la Sagrada Congregación de la Propagación de la Fe, dada el 26 de junio de 1820 (Gasparri, Fontes. n° 4718), en la cual, entre otras cosas se afirma: "Los príncipes, tanto los bautizados como los no bautizados, poseen plena potestad en lo que concierne a los matrimonios de los súbditos no bautizados. Los impedimentos matrimoniales establecidos por ellos —si no son contrarios al derecho natural o divino— anulan completamente el vínculo matrimonial".

(6) Hasta el 19 de abril de 1903 los protestantes domiciliados en las parroquias donde se promulgó el decreto *Tametsi* (y no exentas por la Declaración Benedictina o de otra manera) no contraían matrimonio válido si no expresaban su consentimiento ante el párroco católico de su domicilio o ante un sacerdote delegado por él o por el Ordinario del lugar. El decreto *Tametsi* se promulgó y tenía vigencia en casi todas las parroquias de Italia, España, Francia, Portugal, América Latina...

observar la forma católica del matrimonio". (can. 1099 § 2).

Algunos simplistas explican estas palabras acudiendo a la analogía. Saben que los católicos no se casan válidamente si no expresan su consentimiento matrimonial ante el sacerdote católico competente y piensan que el matrimonio de los cristianos no-católicos no será válido si los contrayentes no se casan en presencia de un sacerdote cismático o ante un ministro del culto protestante (7).

Tal interpretación debe ser rechazada. Las palabras del canon 1099 se limitan a decir que los acatólicos bautizados no están sujetos a la forma católica, pero no autorizan al ministro del culto protestante o al sacerdote cismático a pedir y recibir —en nombre de la Iglesia Católica— el consentimiento de los contrayentes no-católicos.

Además conviene recordar que los ministros del culto pertenecientes a las sectas disidentes suelen ser los mayores propagadores de herejías y errores contra la fe. No es, entonces, posible concebir que la Santa Sede, maestra de la verdad, quiera hacer depender la validez de un sacramento de la presencia de uno de ellos.

(7) Un joven quiso ingresar en el seminario de Buenos Aires. El párroco no le dio muchas esperanzas: lo consideraba hijo ilegítimo (cfr. can. 1363 parágr. 1) porque sus padres, ambos protestantes, se habían casado sólo por el civil. (La madre, después de la muerte de su marido se hizo católica y educó en la religión católica a su hijo). El sacerdote estaba persuadido de que los protestantes tenían que casarse ante el pastor protestante para ser verdaderos esposos ante Dios. Para defender su posición citó el catecismo argentino de perseverancia, donde (en el n° 322) se lee: "El llamado matrimonio civil no es sacramento, ni verdadero matrimonio entre cristianos". Olvidó este buen párroco que el catecismo de perseverancia ha sido escrito para el pueblo y no para los teólogos y el pueblo católico argentino no hace distinción entre católico y cristiano. (Esto no quita que sería muy conveniente una revisión del catecismo argentino de perseverancia).

Hay quienes piensan que los sínodos de estas sectas disidentes pueden determinar la forma jurídica del matrimonio para todos sus afiliados, como lo hace la Santa Sede para los católicos.

También esta opinión debe ser rechazada. Las sectas disidentes no son sociedades públicas: sus Jefes y sus sínodos no pueden dar normas que obliguen en conciencia. Y ningún texto del Código de Derecho Canónico autoriza sostener que los sínodos generales de las sectas protestantes o cismáticas tengan potestad delegada del Papa para establecer la forma jurídica matrimonial para los no-católicos bautizados. El Sumo Pontífice no concede la potestad legislativa ni a los herejes ni a los cismáticos.

Algunos autores afirman que los herejes y los cismáticos no están sujetos a ninguna forma jurídica y que su matrimonio es válido en cualquier país del mundo, aunque lo contraigan sin testigos y sin solemnidades; basta que se unan "affectu maritali" (8).

Sin embargo ningún texto del Derecho Canónico puede aducirse en favor de esta aserción y por eso nos vemos obligados a concluir que los acatólicos no se casan válidamente si no expresan su consentimiento matrimonial conforme a las normas de derecho civil (9).

Los teólogos católicos están concordes en sostener que la autoridad civil tiene facultad de irritar varios actos de sus súbditos, aunque a estos actos, por derecho natural, no les falta nada para su validez. Y justamente: la autoridad su-

prema e independiente —como es la civil— puede establecer dentro de los límites de su competencia, todo lo que se requiere para asegurar el bien público. Para esto ha sido instituída por Dios (10).

Ahora bien. El bien público exige que los contratos de importancia sean nulos e írritos si no se observan ciertas formalidades legales. Entre ellos el primer lugar lo ocupa el matrimonio. Un acto tan importante como es el matrimonio, cuya validez trae consigo muchos efectos jurídicos, debe ser fiscalizado por una autoridad pública. Por eso la autoridad civil ciertamente es competente para establecer la forma jurídica del matrimonio para todos los no bautizados y —por derecho devolutivo— también para los bautizados, si la suprema autoridad eclesiástica no lo hace. Si los cristianos disidentes pudiesen casarse sin ninguna formalidad jurídica, muchos matrimonios serían dudosos; ni la Iglesia ni las autoridades civiles podrían conocer quienes contrajeron enlace. La autoridad civil no podría defender los derechos de los esposos ni exigirles el cumplimiento de sus obligaciones. Se facilitaría el divorcio y la poligamia con grave ofensa del matrimonio-sacramento y con grave daño para la sociedad.

(can. 1038 § 2), pero el canon 1099 insi-

Alguien aducirá, quizás, como objeción las palabras del Papa Pío X: "Las leyes sobre el matrimonio están bajo el dominio exclusivo de la Iglesia" (11). La afirmación del Sumo Pontífice no debe interpretarse con demasiada estrechez.

Consta que en los primeros siglos del cristianismo, los emperadores bizantinos legislaban también en materia matrimo-

(8) Capello, *Summa Juris publici ecclesiastici*, Roma 1943, n° 434, 3°; Cayetano Bruno, *El derecho público de la Iglesia en la Argentina*, Bs. As. 1956, II vol. pág. 338; Casimiro Climent, *Legislación canónica sobre el matrimonio* (en el estudio: *El matrimonio cristiano*, Madrid, Razón y Fe, 1931) pág. 150.

(9) Es evidente que el matrimonio de dos no católicos es válido ante Dios si ellos observan la forma católica (ordinaria o extraordinaria) del matrimonio.

(10) Tanqueray, *Synopsis Theolog. moralis*, París 1945, t. II, N° 381; Lucius Rodrigo, *De legibus*, Santander 1944, N° 368, 3°.

(11) Carta a los obispos de Bolivia, 24 de nov. de 1906, Colección de encíclicas y cartas pontificias. Poblet, Bs. Aires 1946, pág. 586.

nial (12). Los obispos exigían a los fieles el cumplimiento exacto de las leyes imperiales aún cuando estas establecían la forma jurídica y los impedimentos matrimoniales (13).

Actualmente la suprema autoridad eclesiástica se reserva el derecho exclusivo de establecer y abrogar los impedimentos matrimoniales para todos los bautizados (Can. 1038 § 2), pero el canon 1099 insinúa con suficiente claridad que también ahora la autoridad civil tiene autorización tácita para imponer forma jurídica matrimonial a los cristianos disidentes. En efecto, el mencionado canon se contenta con afirmar que los acatólicos bautizados no están sujetos a la forma católica del matrimonio. No dice más. No afirma que los acatólicos al contraer matrimonio están exentos de cualquier forma. La suprema autoridad eclesiástica no quiso imponer la forma jurídica matrimonial para los acatólicos disidentes, por razones fácilmente comprensibles, pero tampoco quiso eximir a los protestantes y a los cismáticos de toda forma jurídica, porque esto causaría grave perjuicio a la comunidad.

Es pues muy acertado afirmar que actualmente todos los acatólicos bautizados, cuando se casan, deben expresar su consentimiento matrimonial conforme a las leyes civiles del país donde contraen su enlace. Si no lo hacen, su casamiento

no tiene valor ante Dios, pues su consentimiento matrimonial —aunque naturalmente suficiente— queda jurídicamente ineficaz (14).

Conviene, sin embargo, recordar que las leyes civiles de varias Naciones reconocen en el fuero civil todos los matrimonios celebrados ante los sacerdotes cismáticos y ante los ministros del culto de las sectas protestantes admitidas. En estos países los cristianos no-católicos tienen mayor libertad. Pueden contraer matrimonio "civil" o "religioso" (según la costumbre de su secta) y en ambos casos su casamiento será válido ante Dios (15). En las naciones (como por ej. la República Argentina), donde la ley civil no reconoce otro matrimonio que el civil, los casamientos "religiosos" de los protestantes y cismáticos no tienen ningún valor ante Dios. Los cristianos disidentes que se casaron sólo ante un pastor protestante o ante un sacerdote cismático, viven en concubinato, o —a lo más— en un matrimonio putativo.

(14) Contra las posibles objeciones debe tenerse en cuenta que Jesucristo elevó a la dignidad de sacramento el contrato matrimonial legítimo, pero El no determinó cuándo el contrato es legítimo. Esto lo debe determinar la autoridad eclesiástica, o —con su permiso, por lo menos tácito— la autoridad civil.

(15) La autoridad estatal ordinariamente exige ciertos requisitos legales para reconocer los efectos civiles a los matrimonios celebrados ante un ministro del culto no-católico.

La legislación italiana, por ej. da —en síntesis— la siguiente reglamentación: El matrimonio celebrado ante el ministro del culto admitido produce todos los efectos civiles desde el momento de su celebración con tal que:

- a) que sea inscripto debidamente en el Registro Civil;
- b) que entre los futuros esposos no exista ningún impedimento dirimente establecido por la ley civil, y;
- c) que el ministro del culto admitido sea debidamente autorizado por el competente oficial público.

En Italia, como vemos, la diferencia entre matrimonio civil y religioso de los no-católicos

(12) Justiniano, 1. 26, c. 5; 4. Arcad. y Honor., ibidem, 1. 19.; Teodosio y Valentiniano, 1. 8, c. 5, 17; Anastas. ibid. 1. 9; Codex Theodosianus (ed. Mommsen y Paul Meyer), 1. 3, tit. 7 (citado según Knecht, Derecho matrimonial católico, Madrid 1932, pág. 75).

(13) S. Basilius, Ep. 199, can. 42; (Migne, PG 32, 729); S. Joannes Chrysostomus, ad pop. Antioch. Homil. 16; (Migne PG 49, 164); S. Ambrosius, Ep. 60, ad Patern., c. 8, (Migne, PL 16, 1236); S. Augustinus, De Civitate Dei, 1. 15, c. 16, (Migne, PL 41, 459); Siricius, ad Himerium Epist. (Mansi III, 657); Conc. Milevit. II can. 17 (Hefele, II, 113) citado según Knecht, Derecho Matrimonial católico, Madrid 1932, pág. 75.

Los matrimonios de los católicos.

Según el canon 1099 § 1, N° 1, todos los bautizados en la Iglesia Católica y todas las personas que ingresaron en ella por la voluntaria profesión de fe, están sujetos a la forma matrimonial canónica y por eso —en circunstancias ordinarias— su matrimonio no es válido ante Dios si no expresan su consentimiento ante el sacerdote autorizado y además ante dos testigos por lo menos (16). Los católicos de todos los ritos orientales deben recibir también la bendición del sacerdote asistente; sin ella su casamiento no tendría ningún valor (can. 85 CMEO).

La suprema autoridad eclesiástica varias veces declaró que los católicos unidos sólo civilmente, no son verdaderos esposos. “Ningún católico ignora o puede ignorar” —dice Pío IX, en su alocución *Acerbissimum*— “que entre los bautizados no puede haber matrimonio válido sin que al mismo tiempo sea sacra-

mentos sólo es una: los futuros esposos expresan el consentimiento matrimonial no ante el oficial público del estado civil, sino ante el ministro del culto admitido, debidamente autorizado. Las autoridades civiles no conceden a las sectas religiosas ni el derecho de establecer los impedimentos matrimoniales ni el derecho de declarar la nulidad de tales matrimonios, ni de disolverlos. (Cfr. Pío Ciprotti, *Culti ammessi*, Encicl. cattolica, Roma 1950).

(16) Para los casos extraordinarios el Código de Derecho Canónico establece la norma siguiente: “Si no se puede tener o no se puede acudir sin incomodidad grave a ningún párroco u Ordinario o sacerdote delegado que asistan al matrimonio a tenor de los cánones 1095 y 1096:

1º En peligro de muerte es válido y lícito el matrimonio celebrado ante testigos solamente; y también lo es fuera del peligro de muerte, si prudentemente se prevé que aquel estado de cosas habrá de durar por un mes;

2º En ambos casos, si hay otro sacerdote que pueda asistir, debe llamársele, y él debe, juntamente con los testigos, asistir al matrimonio, sin perjuicio de la validez de éste, si se celebra solamente ante los testigos (canon 1098).

mento y que, por consiguiente, para los católicos cualquiera otra unión de hombre y mujer —aunque contraída conforme a las leyes civiles— no es otra cosa que torpe y abominable concubinato, el cual enérgicamente es condenado por la Iglesia” (17).

En los países, donde la autoridad civil respeta la conciencia de los ciudadanos católicos, el matrimonio canónico tiene asegurados todos los efectos civiles. La inscripción del matrimonio canónico en los registros civiles la procura el párroco enviando al Jefe del Registro Civil la copia exacta del acta matrimonial juntamente con otros documentos que la ley civil prescribe para el matrimonio civil (por ej. certificados de nacimiento, de viudez...).

En las Naciones donde no hay libertad de conciencia y donde la ley de matrimonio civil está imbuída de un espíritu acentuadamente anticatólico, los fieles deben asegurar el reconocimiento de su matrimonio canónico casándose también por el civil. No es menester subrayar que el matrimonio civil, en este caso, no es una simple y honesta inscripción en el Registro Civil, ya que los esposos deben expresar de nuevo su consentimiento matrimonial. No podemos pues extrañarnos que la suprema autoridad eclesiástica califique a la ley de matrimonio civil obli-

(17) Pío IX, Alocución “*Acerbissimum*”, el 27 de sept. de 1852 (Denz. 1640). Concuerdan las palabras de León XIII: “De nada sirve repetir que el Estado deja en definitiva libertad de unirse también en matrimonio delante de la Iglesia, porque se deja asimismo en igual libertad de no presentarse ante la Iglesia y se introduce de hecho la persuasión errónea de que basta la ceremonia civil para vivir en legítimo matrimonio, lo que en realidad no es otra cosa que un torpe y abominable concubinato. (León XIII, Litt. apost. “*Novae condendae legis*”, N° 13).

(18) León XIII, Encicl. *Arcanum* y la carta “*Novae condendae legis*”; Pío XI, Encicl. “*Casti Connubii*”, etc.

gatorio como injusta y desconocedora de los derechos naturales de los ciudadanos católicos (18).

Alcance del matrimonio civil

Las consideraciones anteriores nos permiten adquirir una exacta noción del matrimonio civil. Para ser más claros indicaremos separadamente todos los posibles casos:

1.—Si ambos contrayentes están bautizados en la herejía o en el cisma y nunca ingresaron en la Iglesia Católica por una voluntaria profesión de fe, su casamiento civil es válido ante Dios y —por consiguiente— también es sacramento (can. 1012).

2.—Si ninguno de los contrayentes está válidamente bautizado, su casamiento civil no es sacramento, pero es matrimonio válido ante Dios (19).

3.—Si, por lo menos, uno de los contrayentes ha sido bautizado en la Iglesia Católica o entró en ella haciendo voluntaria profesión de fe y los contrayentes quieren casarse en seguida por la Iglesia Católica, su casamiento civil no es sacramento, ni verdadero matrimonio válido ante Dios; es sólo un acto jurídico con el cual los novios aseguran los efectos civiles a su (futuro) matrimonio canónico (20).

(19) El casamiento civil de una persona no bautizada con una bautizada en el cisma o en la herejía, es matrimonio válido ante Dios, pero no es sacramento ni siquiera para la parte bautizada. Lo mismo vale cuando un católico —con la necesaria dispensa— contrae matrimonio canónico con una persona no bautizada; su casamiento es válido, pero —según la opinión más común en la Iglesia— no es sacramento, (cfr. Capello, *De matrimonio*, Roma 1947, N° 36).

(20) En los países, donde la ley del Estado asegura los efectos civiles a los matrimonios canónicos se prohíbe a los católicos, bajo pena de pecado grave, casarse por el civil antes (o después) de la celebración del matrimonio canónico.

4.—Si por lo menos, uno de los contrayentes ha sido bautizado en la Iglesia Católica o entró en ella haciendo voluntariamente la profesión de fe, y los contrayentes no quieren celebrar en seguida el matrimonio canónico, su casamiento civil no es sacramento, ni verdadero matrimonio válido ante Dios; es sólo un acto jurídico con el cual los contrayentes quieren asegurar los efectos civiles matrimoniales a su (proyectado) concubinato (21). En consecuencia podemos proponer la siguiente definición del matrimonio civil: El matrimonio civil es un verdadero matrimonio, válido ante Dios, para aquellos que nunca pertenecieron a la Iglesia Católica y si ambos contrayentes están válidamente bautizados, es decir, si son cristianos o apóstatas de la religión cristiana (22) su casamiento civil también es sacramento (23).

Por el contrario, para los bautizados en la Iglesia Católica y, para los que entraron en ella por la voluntaria profesión de fe (aunque después tanto éstos como aquéllos, la hayan abandonado), el casa-

(21) Desde el 19 de mayo hasta el primero de enero de 1949, las personas bautizadas en la Iglesia Católica pero educadas desde la niñez en la herejía, en el cisma, en una religión no-cristiana o sin ninguna religión, no estaban sujetas a la forma canónica del matrimonio, si —por lo menos— uno de sus padres no era católico. (Motu propr. Pii XII, 1 aug. 1948, AAS, 40, 305).

(22) La palabra apóstata se toma en sentido amplio; comprende también a aquellos que, bautizados válidamente, desde la niñez han sido educados en una religión no cristiana o sin religión alguna.

(23) La palabra "matrimonio" tiene dos significados: en un caso significa el casamiento (en latín curial: *matrimonium in fieri*), en otro, la sociedad conyugal (en latín curial: *matrimonium in facto esse*). Según la enseñanza de la Iglesia Católica, la sociedad conyugal (*matrimonium in facto esse*) nunca es sacramento en el sentido estricto de la palabra y el casamiento (*matrimonium in fieri*) siempre es sacramento si es válido ante Dios y ambos contrayentes están válidamente bautizados. (cfr. can. 1012 y la encicl. "Casti Connubii, edición Poblet, N° 68).

miento civil no es sacramento ni verdadero matrimonio válido ante Dios, es sólo un acto jurídico, en virtud del cual la unión de un hombre con una mujer —tanto matrimonial como concubinaria— goza de todos los efectos matrimoniales en el fuero civil (24).

La definición es exacta aunque de esto no se sigue que todos los matrimonios civiles de los no católicos sean válidos ante Dios. Para que el casamiento civil de los no católicos tenga valor ante Dios se requiere no sólo que los contrayentes expresen su consentimiento matrimonial conforme a las normas del derecho civil,

(24) Existe una excepción. Si los novios católicos, encontrándose en la situación descrita por el can. 1098, se casan (sólo) por el civil y explícitamente quieren que su consentimiento matrimonial expresado ante el oficial público tenga valor también ante Dios, su casamiento ("civil" es sacramento. Pero este casamiento civil es válido ante Dios y sacramentos no porque los futuros esposos expresaron el consentimiento matrimonial ante el oficial público, sino porque se cumplieron todos los requisitos enumerados en el mencionado canon 1098. La excepción es, como vemos, sólo aparente. Es evidente que los novios antes de casarse, deben manifestar su "intención" a los testigos (dos, por lo menos), para que conste de ella en el fuero externo (cfr. can. 1103 parágrafo 3). De otra manera hay presunción que no querían sujetarse a la forma católica extraordinaria, sino que querían contraer enlace válido sólo en el fuero civil.

(25) Los vicios esenciales del consentimiento matrimonial más comunes son:

- a) la falta de suficiente uso de razón (can. 1083).
- b) la falta de libertad (can. 1087).
- c) el error en lo que toca a la identidad de la persona con la cual se contrae matrimonio (can. 1803).

sino también que entre ellos no exista ningún impedimento matrimonial dirimente y que su consentimiento no adolezca de algún vicio esencial (25).

Los no bautizados están sujetos a todos los impedimentos de derecho natural y de derecho civil (26). Su consentimiento debe tener las cualidades que exige el derecho natural.

Los bautizados no católicos no están sujetos a los impedimentos matrimoniales establecidos por el derecho civil, sino exclusivamente a los impedimentos matrimoniales establecidos por la Santa Sede para los bautizados; su consentimiento debe tener todas las cualidades determinadas por el derecho canónico (27).

- d) alguna condición puesta contra las propiedades esenciales del vínculo matrimonial (can. 1086).

El Código Civil Argentino no menciona el vicio del consentimiento puesto en el cuarto lugar; y el vicio puesto en el primer lugar, lo pone —parcialmente— entre los impedimentos: la locura (artic. 9).

(26) La ley civil que priva a una persona —sin su consentimiento— del derecho a casarse, está evidentemente contra el derecho natural. No impone ninguna obligación en conciencia y no irrita el matrimonio de los no-bautizados. Tal ley es p. ej., la que establece como impedimento matrimonial alguna enfermedad contagiosa (cfr. Collect. Const. S. Sedis, ed. París, N° 848, citado según Cápello, De matrimonio, 1947, N° 77).

(27) Los protestantes están sujetos a los impedimentos matrimoniales determinados por el Código de Derecho Canónico (latino); los cismáticos por el Código de Derecho matrimonial para la Iglesia Oriental (AAS, 1948, pp. 89 y ss.). Pero ahora ni unos ni otros están sujetos al impedimento dirimente de la disparidad de cultos (can. 1070 y el can. 60 CMEO).